

Puerto Rico

El repliegue de la estadidad

José Javier Colón

El año 1998 planteó al pueblo de Puerto Rico retos importantes en los planos político, económico y social. Al cumplirse cien años de presencia estadounidense en suelo boricua, el gobierno local convocó a una consulta sobre el futuro de las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos. El presente ensayo discute las implicaciones de los resultados del proceso plebiscitario de 1998. La sociedad civil puertorriqueña tuvo una participación destacada en la definición de la agenda política de esa coyuntura, manifestando una voluntad de protesta frente a las prioridades impuestas por la clase política.

El 14 de diciembre de 1998, la prensa estadounidense e internacional destacaba que los electores puertorriqueños habían mostrado su firme oposición a solicitarle al Congreso de Estados Unidos que la isla fuera anexada al coloso del Norte. «Puerto Rico rechaza la estadidad» fue el titular internacional más común¹. La noticia adquirió un significado especial al producirse casi 100 años después de la firma del Tratado de París, mediante el cual EEUU asumió el control de Puerto Rico como supuesta compensación por los gastos bélicos sufridos por ese país durante la Guerra Hispanoamericana.

En la última década, el electorado declinó de nuevo la invitación del gobierno de Puerto Rico a solicitar algo que la mayoría del pueblo puertorriqueño

JOSÉ JAVIER COLÓN: catedrático asociado al Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico; co-autor, junto con Ramón Bosque Pérez de *Las carpetas: persecución política y derechos civiles en Puerto Rico*; ha publicado varios ensayos sobre el tema de las relaciones políticas contemporáneas entre Puerto Rico y Estados Unidos.

1. Entre los periódicos estadounidenses que informaron o editorializaron sobre la derrota de la estadidad se pueden mencionar: *The Boston Globe*, *The Washington Post*, *The Washington Times*, *The New York Times*, *New York Post*, *USA Today* y el *Nuevo Herald*. La importante cadena de noticias CNN también cubrió la derrota de la estadidad de forma insistente. De la prensa internacional se destacan los reportajes de *El País* y el *ABC* de España así como informaciones de *Prensa Latina* provenientes de Cuba. Sandra D. Rodríguez Cotto: «Resuena el eco del traspies estadista» en *El Nuevo Día*, 16/12/98, p. 5.

Palabras clave: situación política, estadidad, libre asociación, plebiscito, Puerto Rico.

ha rechazado persistentemente: la disolución de la nacionalidad en el marco del federalismo estadounidense y la pérdida de la autonomía fiscal que exige a los boricuas del pago de contribuciones federales. Es la segunda ocasión en época reciente en que los electores puertorriqueños (cerca de un 71% del electorado participó en la consulta, un poco más bajo de lo usual para este tipo de evento) rechazaban un proyecto de anexión. El dato es particularmente significativo si se considera que en ambos casos (1993 y 1998) las consultas sobre el llamado estatus político² se llevaron a cabo bajo el auspicio de un gobierno insular que favorece la llamada «estadidad». El mensaje era claro para todo aquel que quisiera escucharlo: los votantes estaban desautorizando el intenso cabildeo realizado por el gobierno de Pedro Rosselló González durante los pasados seis años, ante el Congreso de EEUU y ante la comunidad internacional, para adelantar el proceso anexionista. Fiel a su política de constante confrontación y de desprecio por el Estado de derecho democrático, el gobierno de Puerto Rico publicó anuncios en la prensa donde desconocía el resultado y proclamaba triunfante la opción de la «estadidad». Un senador del principal partido de oposición, el PPD (Partido Popular Democrático) se vio obligado entonces a comparecer ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico para solicitar que el gobierno publicara el texto del resultado tal y como lo había certificado la Comisión Estatal de Elecciones, el único organismo con autoridad legal para hacerlo. El tribunal así lo determinó eventualmente.

Vale destacar que el electorado puertorriqueño nunca ha pedido la anexión de la isla en las consultas electorales especiales que se han llevado a cabo desde 1952, fecha en que se aprobó el Estado Libre Asociado (ELA). Por el contrario, la ciudadanía boricua ha solicitado varias veces a representantes del gobierno de EEUU cambios mutuamente aceptables para definir una nueva relación política no colonial y no territorial. El gobierno estadounidense no ha atendido esas peticiones, aunque se comprometió a ello de forma oficial ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en 1953. Existe, por tanto, un claro problema en relación con lo que algunos gustan llamar en estos días «déficit democrático» en el actual vínculo político entre Puerto Rico y EEUU. Esta es una realidad ineludible a la que el gobierno estadounidense tendrá que enfrentar más temprano que tarde.

¿Quién ganó la consulta?

La opción «ninguna de las anteriores» (que obtuvo un 50,2%) fue defendida por una amplia coalición de fuerzas de la oposición política. En la misma se destacaba la presencia del PPD, pero incluía también sectores organizados de la sociedad civil puertorriqueña. Varios sindicalistas, artistas, intelectuales y líderes independentistas no afiliados a partidos políticos hicieron lla-

2. En Puerto Rico se utiliza el término 'estatus político' para referirse al problema de las relaciones políticas entre Puerto Rico y EEUU. Algunos lo usan indistintamente con el 'problema colonial'.

mados a votar en contra de la «estadidad», a castigar al gobierno de turno o a negarse a participar en la consulta. De hecho, aunque el PPD es un claro beneficiario de la derrota de la opción preferida por el gobernante PNP (Partido Nuevo Progresista), ha sido consistente en declarar la victoria de «ninguna de las anteriores» como un triunfo del pueblo puertorriqueño y no una sectaria de partido político alguno³. El triunfo de las fuerzas antianexionistas constituyó una sorpresa para muchos, sobretodo por su contundencia, tomando en cuenta la forma discriminatoria en que se llevó a cabo el proceso electoral. Más de la mitad del electorado votó por «ninguna de las anteriores», 47% se expresó a favor de la anexión, un 2,4% registró su apoyo a la independencia y un 0,5% favoreció una forma de soberanía propia bajo el encasillado de «libre asociación»⁴. Por otro lado, cerca de un 10% de los que votan en los comicios regulares de candidaturas cada cuatro años se abstuvo de participar. El PIP (Partido Independentista Puertorriqueño), que favoreció la consulta, sufrió un duro revés al ver su base electoral reducirse prácticamente a la mitad. En una consulta sobre el mismo asunto, en 1993 el PIP había obtenido el doble de los votos de los alcanzados en 1998. El liderazgo del partido ignoró los pedidos reiterados de amplios sectores de la sociedad civil y de la izquierda para que se uniera a la oposición al reciente plebiscito. Sus exiguos resultados podrían incluso poner en peligro la propia supervivencia de esta organización fundada en 1946 cuando el PPD, dirigido entonces por Luis Muñoz Marín, abandonó la defensa de la independencia nacional. El PIP, sin embargo, se reafirmó en la corrección de su apoyo al proceso plebiscitario argumentando que su respaldo al plebiscito era un precio necesario a pagar para colocar al movimiento anexionista en la coyuntura precaria en que se encuentra.

En el proceso de lograr el triunfo de la opción de «ninguna de las anteriores», la mayoría de los votantes parece haber utilizado el plebiscito para diversos fines. Por un lado, en el plano de la llamada «lucha del estatus», entre amplios sectores se mostró la oposición a la anexión como futuro político. La identidad cultural puertorriqueña manifestó su poder de convocatoria y resistencia. Se rechazó también el intenso cabildeo en el Congreso favorable a la anexión, sufragado con fondos del erario público. Por otro lado el llamado plebiscito sirvió para impugnar algunas de las principales políticas públicas adoptadas por el propio gobernador Rosselló. Salvando las diferencias sustanciales de contexto, el voto del 13 de diciembre tiene implicaciones parecidas a la derrota electoral del régimen autoritario pinochetista y que ayudó enormemente a la transición democrática chilena. En ambos casos, los gobernantes buscaban lana y salieron trasquilados. Miles de trabajadores que

3. José R. Varela Hernández: «El triunfo del pueblo» en *El Nuevo Día*, 22/12/98, p. 45.

4. Habría que aclarar, sin embargo, que la simpatía hacia la soberanía plena en la isla es mayor que lo registrado en las urnas en 1998. Varios analistas coinciden en estimar que la mayoría del independentismo puertorriqueño entendió que la respuesta táctica más efectiva en la coyuntura de 1998 era votar por la opción que resultó triunfante o abstenerse de votar.

habían salido a la calle meses antes a protestar por la privatización de los servicios telefónicos, utilizaron su voto como una forma de protesta e hicieron un llamado público en esos términos. En cierto sentido «el debate sobre el estatus» pasó a un segundo plano entre amplios sectores populares frente a la urgencia del electorado por emitir un voto castigo contra el gobierno de Rosselló y su política neoliberal de privatización agresiva.

El trasfondo del plebiscito

La papeleta electoral del plebiscito estaba diseñada para que triunfara la anexión. El partido gobernante definió las fórmulas en competencia de forma tal que el PPD no tuviera espacio donde votar. Distinto al caso de la consulta de 1993, aquí el gobierno del PNP definió las fórmulas, ignorando las objeciones de la oposición. En la legislación plebiscitaria en cuestión el ELA era definido, en palabras del ex-gobernador Rafael Hernández Colón, como un «mamarracho colonial». La estrategia del PNP era dividir la oposición y ganar la consulta con una pluralidad frágil. Si el PPD no aceptaba las definiciones impuestas y optaba por votar en la columna «ninguna de las anteriores», entonces este partido no tendría derecho a utilizar fondos públicos para la campaña. Pero el PNP, por su parte, tenía a su disposición todos los dineros públicos disponibles, más los que se ha allegado mediante alegados esquemas de corrupción y una política de privatización agresiva que siempre genera ganancias a corto plazo para el gobierno privatizador. Era una competencia, desde todo punto de vista, antidemocrática. Esta no era la primera instancia de imposición por parte del gobierno de Rosselló. Durante la última década ha intentado forzar el tema de la anexión tanto en la isla como en EEUU. Dentro de su perspectiva, la integración creciente de la economía de Puerto Rico a la de EEUU, y la pérdida reciente de algunos beneficios contributivos especiales asociados con la condición actual del ELA (la llamada Sección 936 del Código de Rentas Federal), hacen posible «venderle» la llamada «estadidad» de Puerto Rico al Congreso. Para los anexionistas sólo es cuestión de tiempo que la incorporación de Puerto Rico como estado se imponga a medida que las generaciones anteriores identificadas con Muñoz Marín y el PPD vayan abriéndole paso a las más jóvenes.

Ya en 1993 el mismo gobierno del PNP auspició una consulta sobre preferencias políticas con similares propósitos, donde se obtuvo el mismo resultado negativo para su convocante. Las fuerzas antianexionistas resultaron claramente mayoritarias (cerca del 53%, si se cuenta los que votaron por una versión reformada del ELA actual, junto con los votos independentistas), mientras que la anexión obtuvo 46,5% de los votos. Derrotados en la isla en 1993, los anexionistas optaron por regresar a la legislatura de EEUU en su intento por convencer a sectores influyentes de que ofrecieran la anexión formal en una consulta electoral auspiciada por el propio Congreso federal. Si el gobierno estadounidense ofrecía tal posibilidad, calculaban, resultaría difícil argumentar, como se había hecho en el pasado en la isla, que esta opción no sería nunca atendida con seriedad por EEUU. Además, intentaban

lograr que el gobierno estadounidense definiera las alternativas de forma tal que la llamada «estadidad» resultara la única opción favorecida.

Desde 1993 el liderazgo anexionista llevó a cabo la campaña de cabildeo profesional más sofisticada y costosa que conozca la historia de Puerto Rico. Lograron el apoyo de sectores muy poderosos del sindicalismo de EEUU (los que son a su vez importantes contribuyentes del Partido Demócrata)⁵. De esa forma comprometieron el apoyo de la Casa Blanca en pro de una legislación favorable a sus intereses. Los anexionistas convencieron también a Clinton y a buena parte de la delegación demócrata en la Cámara de Representantes, y a cierto sector minoritario del Partido Republicano, de que apoyar la anexión de la isla representaría ganancias entre los votantes latinos. Pero ni en las filas demócratas ni en las republicanas había consenso sobre la propuesta de apoyar la llamada «estadidad». Dos de los tres congresistas puertorriqueños, los demócratas Luis Gutiérrez y Nydia Velázquez se opusieron tenazmente a esta estrategia anexionista, la que consideran como una clara afrenta al derecho de autodeterminación de los puertorriqueños⁶.

De otro lado sectores de la derecha republicana, como los diputados Don Young, Dan Burton y Larry Craig, favorecieron la legislación plebiscitaria como una forma de cortar las alas a cualquier reclamo de mayor gobierno propio que pudiera surgir de las filas autonomistas e independentistas. Este sector conservador apoya la remilitarización estadounidense que se lleva a cabo en la isla. Como se sabe, la Marina de EEUU está en proceso de instalar nuevos sistemas de radares en la isla de Vieques y en la parte sur de Puerto Rico. Ese sector conservador, de arraigados instintos etnocéntricos, se niega a aceptar que los puertorriqueños no se definan a sí mismos como estadounidenses y rechacen la anexión; les resulta imposible entender que los puertorriqueños somos, culturalmente, una nación caribeña inasimilable.

El liderazgo político de EEUU está muy lejos de tener una posición homogénea en torno a este espinoso asunto. Importantes voceros de la derecha republicana, como el ex-candidato presidencial y comentarista político Pat Bu-

5. Las posibilidades de consideración de la legislación federal en la Cámara de Representantes fue favorecida por el hecho de que la Legislatura de Puerto Rico le dio el visto bueno al proyecto de sindicación de los empleados públicos en la isla. Mediante éste se abrió la posibilidad de que varias uniones de trabajadores de EEUU, con fuertes vínculos con el Partido Demócrata, obtuvieran la representación de una parte sustancial del nuevo «mercado de cuotas» que se abre con la sindicación local. La American Federation of State, County, and Municipal Employees es una poderosísima fuerza política en EEUU, tanto por su número electoral como por ser uno de los más importantes contribuyentes del Partido Demócrata. De acuerdo a información recopilada por *The New York Times*, entre el 1 de enero de 1995 y el 30 de junio de 1996, durante las pasadas elecciones de 1996 dicha unión fue uno de los diez más grandes contribuyentes partidarios. Ese año dicha unión donó 1.616.125 millones de dólares, en su gran mayoría al Partido Demócrata. De hecho, hay sólo cuatro uniones en EEUU con un nivel de apoyo financiero mayor al ofrecido por esta.

6. De los tres congresistas, el más inclinado a aceptar la estadidad es José Serrano, de Nueva York, quien se siente frustrado ante las características coloniales del ELA. Serrano tendió a coincidir con las gestiones del PNP en el Congreso.

chanan, así como grupos de cabildeo como el «English Only», se oponen teazmente a los esfuerzos del PNP. Estos grupos de derecha articularon una poderosa campaña de descrédito contra la llamada «estadidad» utilizando de forma prominente el sistema de internet que conecta a miles de electores conservadores, localizados más que todo en el interior del Partido Republicano. Ese cabildeo de la derecha estadounidense actuó como contrapeso al intenso esfuerzo llevado a cabo por el gobierno de Puerto Rico. Las principales firmas de cabildeo y bufetes legales, así como ex-congresistas con amplia experiencia en este tema fueron contratados por la administración del PNP⁷. El PNP invitó además a varios congresistas a recaudar fondos a la isla; personal del Congreso realizó visitas promocionales; líderes legislativos puertorriqueños viajaron incesantemente a Washington a conferenciar. El esfuerzo a favor de la anexión logró expresiones de apoyo de varios periódicos de EEUU. Parte de la estrategia de presión fue la organización de unas 50 comunidades en EEUU para crear la impresión de la existencia de un clamor público en pro del cambio político para Puerto Rico.

Se ha calculado que los gastos de cabildeo invertidos por el gobierno de Puerto Rico han excedido ya los 200 millones de dólares. Los seguidores de la anexión tenían también fuertes aliados en puntos claves de la estructura congresional. Específicamente Don Young, presidente de la importante Comisión de Recursos Naturales de ese cuerpo, hizo todo lo posible por lograr la aprobación de una medida beneficiosa a los intereses de la anexión al someter un proyecto conocido en Puerto Rico como el «Proyecto Young», que definía las opciones políticas en términos de asegurar la continuidad de la ciudadanía estadounidense con la anexión o perderla si la anexión era rechazada. De esa forma se pretendía orquestar desde el propio Congreso una campaña de miedo contra el electorado de la isla. Una extraña alianza de «liberales» y «conservadores» en la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, cada cual por sus propios motivos, se prestó para esta iniciativa de chantaje electoral. Pero todos los esfuerzos fueron en vano. Aunque en marzo de 1998 la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto Young⁸ por el margen mínimo de un voto, la victoria se disipó tan pronto la medida anexionista llegó al Senado. Allí la oposición al anexionismo fue de tal envergadura que el comité con jurisdicción sobre Puerto Rico (el llamado Comité de Energía) engavetó la medida plebiscitaria sin siquiera llevar la misma a votación en comité⁹. En vez de ceder en su empeño, los anexionistas continuaron tratando de maximizar el hecho de que tenían el control total del gobierno insular

7. Entre 1989-1991 también se intentó infructuosamente darle paso a un plebiscito congresional para consultar a los puertorriqueños sobre sus preferencias futuras de relación política con el gobierno de EEUU. Ese proceso se frustró, al igual que todos los demás intentos que han hecho los líderes puertorriqueños en el curso del presente siglo, desde el patriota Eugenio María de Hostos en adelante.

8. «United States-Puerto Rico Political Status Act», H.R. 856.

9. En 1991, tras someter una medida sobre estatus político, ésta fue rechazada por un voto empate del Comité de Energía. Ahora, sin embargo, el gobierno de Puerto Rico ni siquiera tuvo el beneficio de una votación.

para adelantar su agenda. El 25 de julio de 1998, precisamente al cumplirse 100 años de la invasión de EEUU que inició el traspaso de la soberanía puertorriqueña a esa nueva potencia imperial, Rosselló anunciaba la celebración de otra consulta política. Esta vez, sin embargo, el propio gobierno estaría a cargo de definir las fórmulas que se le someterían al electorado. Entre otras cosas, el gobernador no contó en su apretado calendario con un hecho definitorio del Caribe: la posibilidad, siempre presente, de tempestades atmosféricas.

El huracán Georges

Si el centésimo aniversario de la presencia estadounidense no era suficiente para generar amplias controversias, a fin de año visitó la isla un fenómeno natural imposible de evitar: el huracán Georges, que azotó con fuerza a varias islas del Caribe en septiembre y derivó en un gran daño material¹⁰ y espiritual, al atravesar la isla de este a oeste. El fenómeno produciría estragos aún mayores en República Dominicana y Haití. En Puerto Rico¹¹, cálculos oficiales estimaron que los daños del huracán excederían los 1.500 millones de dólares. Se calcula que, por lo menos, 100.000 personas quedaron sin hogar y que al menos 28.000 viviendas fueron totalmente destruidas. En 1989 el gobierno federal de EEUU había estimado que un 20% de las viviendas de la isla todavía no constituían un lugar adecuado para vivir. El huracán se ocupó de confirmar las estadísticas de forma elocuente. La destrucción masiva de casas, tendidos eléctricos y árboles puso al descubierto la pobreza que 100 años de capitalismo dependiente han logrado mitigar, y muchas veces esconder, pero no erradicar. Durante las primeras semanas luego del huracán, parte sustancial de la isla permaneció sin energía eléctrica y, por lo mismo, sin servicio de agua potable. Los pueblos rurales del centro, estuvieron incomunicados durante varios días por el derrumbe de carreteras y el colapso del servicio telefónico.

Ante las adversidades, la reconstrucción se emprendió con solidaridad ciudadana entre significativos grupos de la población. Los sindicatos del sector público hicieron un alto en sus luchas y se dedicaron de forma ejemplar al restablecimiento de los servicios básicos. El sector empresarial colaboró mediante la celebración de telemaratones y donaciones de diversos servicios. La falta de electricidad obligó a las comunidades a apagar el televisor (cerca de un 96% de los hogares poseen uno) y a «sintonizarse en la frecuencia» de las necesidades del vecino. En escenas que recordaban el famoso cuento «La noche que volvimos a ser gente» del desaparecido literato puertorriqueño José Luis González, los vecinos se reunían de noche a compartir noticias, hielo, compañía y las cenas improvisadas con estufas de gas.

10. A sólo tres semanas del huracán algunos de los economistas consultados estimaban las pérdidas en cerca de 13.000 millones de dólares; v. Pablo J. Trinidad: «Sacudón a la economía» en *El Nuevo Día*, 9/12/98, p. 122.

11. Nilka Estrada Resto: «Crítico el saldo de hogares destruidos» en *El Nuevo Día*, p. 5.

Aunque en muchos casos la labor de las agencias de gobierno fue efectiva, lo cierto es que los recursos gubernamentales no eran suficientes para una crisis mayor como la ocurrida: hacía falta que la propia ciudadanía de forma espontánea u organizada tomara y ejecutara iniciativas de autoayuda. Los medios de prensa motivaron a la opinión pública a cooperar con el esfuerzo de reconstrucción, especialmente en las regiones montañosas. Profesionales, artistas, comerciantes, industriales, entre otros, lograron articular una rara voluntad de solidaridad frente a la desgracia de una parte considerable de la población que, de pronto, exhibía su pobreza y la precariedad de su existencia. Brigadas de obreros laboraron día y noche para restablecer el servicio eléctrico en toda la isla. El afán fue de tal magnitud que seis operarios murieron en el titánico esfuerzo de reparar en pocas semanas las líneas averiadas. Desde luego, no todo fue color de rosas: en algunos sectores todavía se manifestó la actitud pasiva de esperar la ayuda gubernamental, especialmente la estadounidense. En ciertos casos el gobierno de Puerto Rico fomentó esta actitud paternalista mediante el reparto indiscriminado de ayuda y cheques a personas que no siempre podían demostrar sus pérdidas. La corrupción gubernamental mostraba su desagradable rostro en medio de la desgracia. Pero, de cualquier forma, las expresiones de solidaridad florecieron marcando con ello la diferencia.

Clamor por posponer el plebiscito

Organizaciones cívicas, profesionales, religiosas, entre otras, hicieron un reclamo firme de que se pospusiera la consulta. Se urgía al gobierno a que concentrara todos los esfuerzos públicos y privados en la solución de la crisis creada por el huracán. Obispos de varias denominaciones, presidentes de organizaciones profesionales como el Colegio de Abogados, líderes empresariales y sindicales, todos, reclamaron, por lo menos, la posposición de la consulta pautada para diciembre. Hasta dentro del propio partido oficialista hubo oposición a continuar con los planes de llevar a cabo el plebiscito¹². El presidente del Senado expresó preocupación por la insistencia de llevar a cabo el concurso electoral¹³. Igual postura asumieron varios de los alcaldes, incluso el que dirige la Asociación de Alcaldes del propio partido gobernante.

No se justificaba, alegaban estos grupos cívicos y varios líderes de los demás partidos (que entre sí tienen profundas diferencias sobre el futuro político de la isla), que se gastaran más de 20 millones de dólares en un esfuerzo que tenía, en el contexto en que ocurría, muy pocas posibilidades de lograr su alegado propósito: superar la condición colonial de Puerto Rico. En todo caso

12. «Un grupo de funcionarios elegidos por el Partido Nuevo Progresista está atento al desarrollo de la recuperación de los servicios esenciales de sus pueblos para decidir si procede la reactivación de la campaña política en las próximas semanas o si solicitan al gobernador posponer el plebiscito del 13 de diciembre», María Judith Luciano: «Dividido el PNP en torno al calendario político» en *El Nuevo Día*, 30/9/98, p. 14.

13. Mario Santana: «Plebiscito, refuta Charlie Rodríguez a Rosselló» en *El Nuevo Día*, 29/9/98, p. 36.

los fondos a malgastarse en publicidad partidista podían ayudar a fortalecer el menguado presupuesto local destinado a atender emergencias. Pero la clase política gobernante permaneció inmutable. «La vida tiene que seguir», repetía el gobernador Rosselló, que se ha convertido en un experto en seguir adelante con programas gubernamentales sin consultar ni contar con el aval de amplios sectores de la opinión pública. Rosselló, quien había sido reelecto en 1996 con un 51% de los votos, empezaba a mostrar las primeras señales de desgaste e impopularidad por su estilo crecientemente arrogante y de desafío constante a estos reclamos populares básicos. Pero ningún argumento impidió la celebración del plebiscito. El gobierno calculaba que los millones de dólares recibidos del gobierno estadounidense para mitigar los daños de Georges iban a inclinar la balanza a su favor. Trataron, de ese modo, de utilizar las necesidades más inmediatas de la gente para sus fines políticos. No obstante el gobernador se llevó una gran sorpresa. Una vez contados los votos, 54% de la población había rechazado la propuesta anexionista.

A modo de conclusión

Vale la pena repetirlo: los anexionistas fueron por lana y salieron trasquilados. En su afán por forzar el paso hacia la anexión formal y definitiva, el gobierno de Puerto Rico había logrado lo contrario: desacreditar esa opción como una alternativa crecientemente rechazada por los propios puertorriqueños, y fortalecer a los sectores conservadores en EEUU que objetan la admisión de un estado de habla hispana, pobre dentro de los parámetros federales y predominantemente mulato. Aunque algunos congresistas insisten en favorecer la causa de la anexión¹⁴, lo cierto es que los impulsores sufrieron un duro golpe que continuarán sintiendo durante los años próximos. Varios congresistas habían retado al PNP a que produjera una mayoría electoral anexionista en Puerto Rico antes de involucrar al Congreso en el proceso. El PNP aceptó el reto y fracasó. Ese es el signo predominante de la coyuntura.

¿Y dónde queda entonces el proceso de descolonización a partir de esta derrota del anexionismo? Ese es un tema que, por su complejidad, habrá que abordar en otro espacio. Baste decir, sin embargo, que los esfuerzos de concertación entre la oposición política y la sociedad civil potencian un conjunto de posibilidades nuevas en la Isla del Encanto. Eso sí, los medios que se escojan para alcanzar una legitimidad democrática plena fuera de los controles congresionales actuales tienen que ser igualmente democráticos y sensibles a las expectativas y sufrimientos de las clases populares. Está escrito en la pared; para todo el que quiera leer.

14. Associated Press: «Amenaza Young con volver a empezar» en *El Nuevo Día*, 16/12/98, p. 8.